

QUEJOSA-RECURRENTE: ***** Y SU MEJOR HIJO DE IDENTIDAD PROTEGIDA. *****

SECRETARÍA: VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ

V I S T O S para resolver el recurso de queja administrativo **100/2020** interpuesto por la quejosa ***** y su menor hijo de iniciales *****., por conducto de su asesor jurídico especializado en atención a migrantes y autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ***** *****, en contra del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto *****; y,

PRIMERO. Juicio de amparo indirecto. Por escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, a través del sistema de interconexión del sistema integral de seguimiento de expedientes, por sus siglas (SISE), *****

VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b.c.b
2022-03-31 13:41:47

b).- De las autoridades señaladas como responsables denominadas **Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Subdirector de Control y Verificación Migratoria, de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, y**

c) Se le reclama a las autoridades responsables denominadas **Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Hacienda y Crédito Público, Congreso de la Unión y Secretario de Gobernación** se les reclama la creación, aprobación sanción y promulgación de artículo 111 de la Ley de Migración.

d).- Se le reclama a las autoridades responsables denominadas como **Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Subdirector de Control y Verificación Migratoria, de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, y Subdirector de la Estación Migratoria en las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí** la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración.

e).- Se le reclama a las autoridades responsables denominadas como **Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Subdirector de Control y Verificación Migratoria, de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, y Subdirector de la Estación Migratoria en las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí**, la negativa de recibir mi solicitud de inicio de procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo a lo establecido en el (sic) artículo (sic) 11, 21 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en relación a lo establecido en el artículo 18 del reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria.

f).- Se les reclama a las autoridades responsables denominadas como **Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Subdirector de Control y Verificación Migratoria, de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, y Subdirector de la Estación Migratoria en las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí**, la omisión de informar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Estado de San Luis Potosí que se encuentra detenido o alojado en la estación migratoria un menor de edad en compañía de su madre con la finalidad de que se

g).- Se reclama a la autoridad responsable denominada como **Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Estado de San Luis Potosí**, reclamo la omisión de dictar las medidas de protección a favor del menor de edad, así como de la quejosa cuidando el vínculo familiar, así como determinar un albergue distinto a la estación migratoria para salvaguardar el interés superior del menor de conformidad a lo establecido en los artículo (sic) 10, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 fracción X de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación a los artículo (sic) 4, 22, 37, de la Convención Sobre los Derechos de los Niños.”

TERCERO. Interposición del recurso de queja.

CUARTO. Admisión. Por acuerdo de uno de abril de 2017, entre otros, **se admitió** a trámite del recurso de amparo de los autos al magistrado Edgar Humberto Mejía, para la formulación del proyecto de resolución de amparo y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito es competente para conocer y resolver el presente recurso de queja, con base en lo establecido por los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I y 99, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de circuitos, al número, a la jurisdicción territorial y especialización de los tribunales, reformado mediante el Acuerdo General 54/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de diciembre de dos mil quince; ya que se recurre un auto que negó la suspensión provisional de los actos reclamados, dictado por un juez de Distrito del Noveno Circuito, en el que ejerce jurisdicción este tribunal colegiado, especializado en la materia sobre la que versa el juicio de amparo. Además, conforme al acuerdo 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del coronavirus COVID-19, en cuyo anexo se determinó que este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, estaría de guardia por el período comprendido del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte.

SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de queja se interpuso dentro del término de dos días que dispone el artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente:

a) El auto recurrido de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se notificó a la parte quejosa-recurrente, según su manifestación, al día siguiente y, en términos del artículo 31, fracción II¹, de la Ley de Amparo, surtió efectos el veintiséis de los mencionados mes y año.

b) Los dos días hábiles para interponer el recurso transcurrieron del **veintisiete al treinta de marzo de dos mil veinte**; con exclusión de los días veintiocho y veintinueve de marzo del mencionado año, por haber sido sábado y domingo; inhábiles atento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

c) El recurso se presentó oportunamente, vía electrónica, el **treinta de marzo de dos mil veinte**.

Lo anterior, se aprecia gráficamente en el siguiente calendario.

MARZO 2020						
Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
22	23	24	25 a)	26	27 b)	28
29	30 e) f)	31				

- a) Fecha en que se notificó el auto recurrido.
- b) Data en que empezó a transcurrir el término.
- c) ☐ Plazo de cinco días para interponer el recurso.
- d) ☒ Días inhábiles.

1 “**Artículo 31.** Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: ... II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista que se realice en los términos de la presente Ley. Tratándose de aquellos usuarios que cuenten con Firma Electrónica, la notificación por lista surtirá sus efectos cuando llegado el término al que se refiere la fracción II del artículo 30, no hubieren generado la constancia electrónica que acredite la consulta de los archivos respectivos, debiendo asentar el actuario la razón correspondiente; y...”.

- TERCERO. Omisión de transcripción.** No se transcribe el auto recurrido, ni los agravios expresados en el recurso de queja, pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a que formalmente obren en la resolución, inclusive, el artículo 74 de la Ley de Amparo nada dispone al respecto, aunque sí impone el deber de resolver las cuestiones efectivamente planteadas y, por otra parte, obran en el expediente los agravios y copia certificada del acuerdo impugnado.

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del título primero “Reglas generales”, del libro primero “Del amparo en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente plantados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”²

1. Por escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, a través del sistema de interconexión del sistema

VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b.c.ba
2022-03-31 13:41:47

***** y su menor hijo de iniciales

*****., promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y actos siguientes:

1. Titular de las oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con domicilio en Avenida Muñoz Número 362, Fraccionamiento Muñoz, San Luis Potosí, S.L.P. (En su carácter de ordenadora y ejecutora).

2. Subdirector de Control y Verificación Migratoria de las oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de México. con domicilio en Avenida Muñoz Número 362, Fraccionamiento Muñoz, San Luis Potosí, S.L.P. (En su carácter de ejecutora).

3. Subdirector de la Estación Migratoria en las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí. Con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de México. con domicilio en Avenida Muñoz Número 362, Fraccionamiento Muñoz, San Luis Potosí, S.L.P. (En su carácter de ejecutora).

4. *Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.*

5. Congreso de la Unión.

6. Secretario de Hacienda y Crédito Público.

7. Secretario de Gobernación.

8. Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Estado de San Luis Potosí, con domicilio ampliamente conocido.

IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME:

a).- De las autoridades señaladas como responsables denominadas **Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Subdirector de Control y Verificación Migratoria, de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, y Subdirector de la Estación Migratoria en las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí**, les reclamo toda orden verbal o escrita que hayan emitido y que en ningún momento me han notificado, con la cual o las cuales se ha determinado incorrectamente e ilegalmente el aseguramiento, alojamiento, privación de mi libertad o detención dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, **por más de 36 horas**, la cual se ubica en Avenida Muñoz Número 362, Fraccionamiento Muñoz, San Luis Potosí, S.L.P.

b).- De las autoridades señaladas como responsables denominadas **Titular de las Oficinas de Representación del Instituto**

c) Se le reclama a las autoridades responsables denominadas **Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Hacienda y Crédito Público, Congreso de la Unión y Secretario de Gobernación** se les reclama la creación, aprobación sanción y promulgación de artículo 111 de la Ley de Migración.

d).- Se le reclama a las autoridades responsables denominadas como **Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Subdirector de Control y Verificación Migratoria, de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, y Subdirector de la Estación Migratoria en las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí** la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración.

e).- Se le reclama a las autoridades responsables denominadas como **Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Subdirector de Control y Verificación Migratoria, de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, y Subdirector de la Estación Migratoria en las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí**, la negativa de recibir mi solicitud de inicio de procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo a lo establecido en el (sic) artículo (sic) 11, 21 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en relación a lo establecido en el artículo 18 del reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria.

f).- Se les reclama a las autoridades responsables denominadas como **Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Subdirector de Control y Verificación Migratoria, de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, y Subdirector de la Estación Migratoria en las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí**, la omisión de informar a la Procuraduría de

g).- Se reclama a la autoridad responsable denominada como **Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Estado de San Luis Potosí**, reclamo la omisión de dictar las medidas de protección a favor del menor de edad, así como de la quejosa cuidando el vínculo familiar, así como determinar un albergue distinto a la estación migratoria para salvaguardar el interés superior del menor de conformidad a lo establecido en los artículo (sic) 10, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 fracción X de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación a los artículo (sic) 4, 22, 37, de la Convención Sobre los Derechos de los Niños.”

El día de la presentación de la demanda, en su carácter de asesor jurídico federal especializado en atención a migrantes en la ciudad de San Luis Potosí, recibió una llamada telefónica por parte de la quejosa, quien le comentó que se encontraba detenida en la estación migratoria, desde el dieciocho de marzo del año en curso, cuando viajaba en el tren, así como que solicitó refugio sin que a la fecha le hayan recibido su solicitud de refugio.

3. Además, los peticionarios del amparo, **solicitaron la suspensión** en los siguientes términos:

“VIII.- SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.-

SUSPENSIÓN DE PLANO

Solicito la suspensión de plano para los quejosos, en el supuesto de que las autoridades responsables intenten hacer el retorno asistido y/o deportación de la suscrita y de mis dos (sic) menores hijos por no tener los documentos necesarios para demostrar la legal estancia en el territorio mexicano, máxime este supuesto de deportación o retorno asistido se encuentra prohibido por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede la suspensión de plano de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que le solicito a este juzgado de que gire todas la (sic) medidas que sean necesarias para que la (sic) mencionadas autoridades no deporten o retornen a los quejosos.

Por otra parte, al tratarse de menores de edad acompañados, en donde este juzgador tiene la obligación de salvaguardar sus derechos humanos y de acuerdo al interés superior del menor en la misma suspensión de plano se deberá de decretarla en el siguiente sentido:

1.- Ordenar la inmediata libertad y que no se encuentre en la estación migratoria

2.- Ordena a las autoridades responsables que se canalice a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en San Luis Potosí, para que se le mande a un albergue.

3.- Se implemente un plan inmediato para asegurar las alternativas en libertad, en caso de menores acompañados, o bien, los planes de alojamiento alternativo para quienes estén solos.

A lo anterior argumentado tiene aplicación el siguiente criterio:

Época: Décima Época

Registro: 2020336

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV

Materia(s): Común, Administrativa

Tesis: I.21o.A.4 A (10a.)

Página 4587

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO DECRETADA CONTRA SU DEPORTACIÓN, CUANDO SE ENCUENTRAN DETENIDOS EN ESTACIONES MIGRATORIAS.

De los artículos 164 de la Ley de Amparo, 66, 107, 109 y 112 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, se desprende una serie de medidas que coadyuvan a priorizar el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados o no por familiares, detenidos en las estaciones migratorias, que se deben adoptar a la luz de los principios de separación y unidad familiar, respetando en todo momento el interés superior del menor de edad, las cuales el juzgador no puede soslayar. En estas condiciones, el Juez de Distrito que conozca del amparo contra ese acto, debe analizar el asunto bajo la óptica encaminada a la búsqueda y aplicación de medidas alternativas a la detención en la estación migratoria, en que ésta se utilice como último recurso, al tratarse per se, de una privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento o alojamiento); de no ser posible un alojamiento distinto, entonces debe examinar que se cumplan y

VIGÉSIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

A lo anterior argumentado tiene aplicación la siguiente tesis jurisprudencial:

Tesis: 1a./J. 25/2018

La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto –al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación–, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro,

PRIMERA SALA

Tesis y criterio contendientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 56/2016, sostuvo que si bien el artículo 126 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que la suspensión se decretará en el auto de admisión de demanda, lo cierto es que si el Juez de Distrito ordena aclarar aquélla, es claro que no está en condiciones de admitir el libelo constitucional y, en consecuencia, tampoco de decidir sobre la suspensión de plano.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de septiembre de 2018 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de septiembre de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.”

Con fundamento en los artículos 126 y 164, de la Ley de Amparo, solicito se me conceda la suspensión provisional y en su oportunidad la suspensión definitiva de los actos reclamados, **para el efecto que la libertad del quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito y en relación al procedimiento al Instituto Nacional de Migración y en consecuencia se otorgue la libertad en tanto se resuelve en definitiva el presente juicio, la cual se ve afectada al estar alojado en forma ilegal en la estación migratoria,** en tanto se resuelve la legalidad en el procedimiento.

Por lo que todas las actuaciones que se realicen por las autoridades responsables deberán de ser consideradas administrativas por los que los efectos de la suspensión deberá ser que se pongan en inmediata libertad a los quejosos, y el juez de distrito determinara la medias(sic) que sean necesaria de aseguramiento.

En el entendido, que si la orden de detención proviene de autoridad administrativa distinta a la del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se concede la suspensión para que sin demora cese la detención, poniendo al quejoso en libertad o a disposición del Ministerio Público.

Sin que resulte necesario condicionar la medida cautelar otorgada, al otorgamiento de una fianza, pues la normativa de la Ley de Amparo no exige tal requisito, tratándose de asuntos como el que nos ocupa.

De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso.

Quando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad.

Cuando el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesto a disposición.

En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

“AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES ILEGAL CONDICIONAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO AL OTORGAMIENTO DE UNA FIANZA SI EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMA LA ORDEN DE DETENCIÓN GIRADA POR. Si en la demanda de garantías no se reclama acto alguno de autoridad judicial, sino únicamente de autoridades administrativas que no están facultadas legalmente para ordenar la detención de persona alguna salvo en casos urgentes cuando se trate de delito grave así calificado por la ley, tal circunstancia permite establecer que aun cuando en la demanda aludida se señale como acto reclamado una orden de aprehensión, tratándose de autoridades administrativas es evidente que se refiere a una orden de detención, y en tal tesitura, resulta ilegal condicionar la suspensión del acto reclamado al otorgamiento de una fianza, ya que de hacerlo así se contraría el contenido de los artículos 125 y 136, párrafo tercero reformado, de la Ley de Amparo.”

Por lo que al reclamarse una norma general el dispositivo 148⁴ de la Ley de Amparo estatuye que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso, y respecto de los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación.

En consecuencia se debe de otorgar la suspensión provisional y en su caso la definitiva, si a la fecha ya transcurrió el plazo de tres días previsto por el aludido dispositivo 21, cuarto párrafo, constitucional, con fundamento en los artículos 128, 148, 162 y 164, de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad.

Tiene aplicación a lo anterior argumentado la siguiente tesis jurisprudencial:

Época: Décima Época

Registro: 2008231

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación.

Página: 1726

El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión."

4. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en atención a lo ordenado en el cuaderno principal, ordenó la tramitación por duplicado y por cuerda separada del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 289/2020, promovido por la ahora recurrente, contra actos del Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, requirió a las citadas autoridades por la rendición de sus respectivos informes previos y destacó, que no procedía fijar fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental, en atención a lo determinado en el acuerdo 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas para evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del coronavirus COVID-19, lo que, el indicado resolutor, consideró como un caso de fuerza mayor y destacó, que una vez que se levantaran dichas medidas señalaría la fecha

Expuesto lo anterior, el Juez de Distrito estimó que, en la especie, se encontraban **colmados los requisitos establecidos en el artículo 128 de la ley de la materia**, de tal forma que resultaba **procedente la suspensión provisional** de los actos reclamados, en tanto que dicha medida había sido solicitada por la parte quejosa y que, con dicho otorgamiento, no se seguía perjuicio al interés social, ni se contravenían disposiciones de orden público, debido a que, con tal concesión, no se afectaba a la colectividad ni a la actuación pública del Estado, además de que tampoco se actualizaba ninguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la invocada legislación.

Lo anterior, para el efecto de que, de inmediato, se llevara al cabo el procedimiento previsto en el artículo 99 de la Ley de Migración, esto es, a fin de que, dentro de un término que no excediera de veinticuatro horas, se emitiera el acuerdo de presentación a que se refería dicho precepto legal, así como que, una vez que ello aconteciera, las autoridades responsables otorgaran al peticionario del amparo, de ser procedente, las prerrogativas establecidas en los diversos artículos 101 y 102 de la legislación en cita.

Finalmente, destacó que la indicada medida cautelar surtiría efectos de inmediato y sin garantía alguna, en virtud de que no se estaba ante ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 132 de la Ley de Amparo.

QUINTO. Estudio. En principio, cabe precisar que **los motivos de disenso serán analizados bajo el principio de suplencia de la queja**, pues la quejosa y su mejor hijo **se encuentran privados de su libertad ambulatoria, con motivo de su estatus migratorio**; de ahí que, al verse comprometida su libertad personal, procede la suplencia de la deficiencia de los planteamientos hechos valer en el presente recurso, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracciones II y VII, de la Ley de Amparo y el *Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional*, pues al ser los quejosos migrantes indocumentados, **son sujetos de protección especial por parte de todas las autoridades, incluidas las jurisdiccionales, por pertenecer a grupos vulnerables (migrantes y menor de edad)**.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de contenido siguiente:

“ARRESTO ADMINISTRATIVO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO. El arresto establecido en leyes de naturaleza administrativa constituye un correctivo disciplinario (sanción) que se impone a la persona que infringe ciertas normas jurídicas de la misma especie, que se materializa mediante la privación de la libertad personal del infractor, por lo que con independencia de ser un acto formalmente administrativo, al reclamarse en el juicio de amparo, actualiza la hipótesis de suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, pues a pesar de que esa disposición legal alude a la materia penal, la finalidad preponderante del beneficio que consagra consiste en otorgar al quejoso, cuya libertad personal se encuentre comprometida con motivo de cualquier acto de autoridad, una amplia defensa a través de obligar al juzgador constitucional a resolver la petición de garantías, examinando de manera completa y acuciosa el acto mediante el cual se

También es aplicable, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes:

Ahora, la suspensión es considerada por la doctrina como una medida o providencia cautelar, toda vez que su finalidad consiste en conservar la materia del amparo, ya que impide que el acto de autoridad impugnado en la vía

⁶ Jurisprudencia 191/2005, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, registro 175053.

pues a tr
e invalic
so en e

sión se e
proceso
; constitu
n el retar

os Unido

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528

dimientos
es siguien
podrán ser
ue determ
de ampar
ur un an

interés s
encias def
mparo, y
garantía
ios que
spensión d
rar la rep
e el ampa

erales 12

En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.

“Artículo 132. *En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.*

La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos.”.

Así, en el artículo 107, primer párrafo, fracción X, constitucional, se estableció que correspondería al legislador determinar tanto las condiciones como los casos en los que la suspensión sería procedente y, en función de esto, el legislador,

parámetro
de la p
a faculta
os supu
en funció
le irredu
egue por
evisto en

Constitución
artículo 1
electoral,
la ley
nados p
ante las
e.
ulo 126, p
n de la d
o, la qu
idad resp
iato cump

párrafo 126, p
n de la d
o, la qu
idad resp
iato cump

- a de pers
artículo 2
tados U

te de ac
privar
ral o def
e de sus
ción ejida

modo, la
decide
ra que s
eto la pr
los nú
munal; y,
cesario
que se tra
revocaci

ntes exp
eta "de
ncia y g
nmediat
l.

otras pa
suspens
en los q
ue, por
tución Fe
y de pre
amiento

“Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.”

Del precepto anterior se obtiene, que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, como sucede en este asunto.

De ahí que, queda de manifiesto que el ataque a la libertad fuera de procedimiento es uno de los actos, respecto de los cuales, dada su urgencia y gravedad, procede la suspensión de plano, de conformidad con los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá comunicar sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.

En ese contexto, en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se señala una serie de actos o supuestos en los que la suspensión deberá ser otorgada respecto de actos que, por su

Máxime que en el caso se afectan bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, por virtud de su urgencia y gravedad; por tanto, los efectos de la medida deben estar encaminados no sólo a reducir o paralizar los actos, sino además a hacer cesar la afectación de los bienes de manera inmediata.

Así es, porque los ataques a la libertad fuera de procedimiento se consideran actos prohibidos por el numeral 126 de la ley de la materia, cuya violación no cesa y se sigue prolongando hasta en tanto no se restituya al particular en el goce de su libertad, pues se entiende que la afectación derivó de que la autoridad vulneró ese derecho sin mediar procedimiento.

Lo previamente considerado es acorde al contenido del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el cual dispone que de ser procedente la suspensión y, al atender a la naturaleza del acto, el juzgador puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal.

Se dice lo anterior, porque el juzgador de amparo, en cada caso concreto puede conceder la medida cautelar y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de

fundamenta
onal, de c
orgar un
onas.

lad la sus
 uraleza
 arse, sin
 o del ref
 ia provis
 motivo
 o hacer,
 cra un m
 ctos que
 nento.

destacar
ministrativ
se enc
nos adm
es, la p
culares
o bien, a
es transg

administ
la cienc
son:

VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b.c.b
2022-03-31 13:41:47

- Lo anterior, se desprende del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación **1a. CCCXVI/2014 (10a.)**, de texto:

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN. El ámbito constitucionalmente legítimo de participación de la autoridad administrativa en los procesos de producción jurídica en el derecho administrativo sancionador, debe determinarse por referencia a los imperativos de tres valores en juego, a saber: 1) el control democrático de la política punitiva (reserva de ley); 2) la previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos; y, 3) la proscripción de la arbitrariedad de la autoridad (ambas vertientes del principio de tipicidad). Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribe la premisa de que los componentes del principio de legalidad no pueden tener un grado de exigencia idéntico en todos los ámbitos del derecho citado, sino que han de modularse de acuerdo con la función desempeñada por el Estado, por lo que para determinar el balance

VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b.c.b
2022-03-31 13:41:47

VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b.c.b
2022-03-31 13:41:47

VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b.c.b
2022-03-31 13:41:47

VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b.c.b
2022-03-31 13:41:47

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso”.⁹

1. El derecho administrativo sancionador es una rama de la ciencia jurídica que se encarga, entre otros fines, de sancionar a servidores públicos por la

⁹ Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 41. Con número de registro: 2006590.

2. Por su naturaleza punitiva, el derecho administrativo sancionador comparte muchos de los principios rectores del derecho penal, como lo es el de presunción de inocencia.

Así lo determinó la Primera Sala del Máximo Tribunal
en la tesis **2a. XXXV/2007**, de texto:

Por tanto, toda aquella persona que se encuentre en procedimiento administrativo, como lo es aquél en

¹⁰ Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007, página 1186. Con número de registro: 172433.

Así, la base teórica y los principios señalados permean el asunto y permiten resolver la litis, la cual consiste en determinar si es correcto o no el auto mediante el cual se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados por los quejosos, consistentes en las órdenes de aseguramiento, alojamiento, privación de la libertad o detención dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, para el efecto de que de inmediato se realice el procedimiento contemplado en el artículo 99 de la Ley de Migración, es decir, para que dentro de un término que no exceda de veinticuatro horas, se emita el acuerdo de presentación que establece dicho numeral y, hecho lo anterior, las responsables se aseguren de otorgarles, de ser procedente, las prerrogativas contempladas por los artículos 101 y 102 de la legislación en cita.

En sus motivos de agravio, los quejosos –ahora recurrentes- señalan, les causa perjuicio el auto impugnado, pues refieren el juez federal soslayó decretar la suspensión respecto de uno de los actos reclamados, a saber, el artículo 111 de la Ley de Migración,¹¹ cuya inconstitucionalidad impugnaron en su demanda de amparo.

En tal virtud, aducen, la determinación impugnada es incongruente, aunado a que se les debió otorgar la suspensión

En los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior de los mismos.”.

Por lo anterior, insisten, se les debió otorgar la indicada medida cautelar, al haber transcurrido el plazo de tres días a que se refiere el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,¹² y además, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128, 148, 162 y 164, todos de la ley de la materia,¹³ para el efecto de que fueran

Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia.

Los inconformes, insisten, se les debe conceder la suspensión provisional y, en su caso, la definitiva, para el efecto de que queden a disposición del juzgado de Distrito y, en cuanto al procedimiento, ante el Instituto Nacional de Migración y, otorgarles, en consecuencia, su inmediata libertad, de conformidad con lo previsto en el artículo 164 de la Ley de Amparo, para lo cual deberá determinarse lo relativo a las medidas necesarias de aseguramiento, pues, reitera, su libertad se ve afectada al encontrarse alojados en la estación migratoria

Refieren, debe otorgársele la suspensión solicitada contra la orden de alojamiento por un término mayor a las treinta y seis horas a que se refiere el artículo 21 constitucional, para que ésta no se ejecute, en términos de lo dispuesto en el artículo 162

Época: Décima Época. Registro: 2008231. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, enero de 2015, tomo II. Materia(s): Común. Tesis: XXVII.3o. J/9 (10a.). Página: 1726.

Como apoyo, invocan el criterio titulado: ***“AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES ILEGAL CONDICIONAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO AL OTORGAMIENTO DE UNA FIANZA SI EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMA LA ORDEN DE DETENCIÓN GIRADA POR.”***¹⁵

También se advierte, en suplencia de la queja, que el pronunciamiento realizado respecto a la procedencia de la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en la privación de la libertad o detención fuera de procedimiento, se realizó en una vía inadecuada, pues, contrario a lo alegado por la parte recurrente, tal determinación no debía realizarse en vía incidental, como se hizo en el caso, sino que tal pronunciamiento se regía por el trámite de la suspensión de oficio y de plano.

Época: Novena Época. Registro: 202884. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: **Aislada**. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 1996. Materia(s): Común. Tesis: XX.59 K. Página: 889.

*“**Artículo 126.** La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.*

La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.”

Ahora, en la demanda de amparo, la quejosa *****

***** y su menor hijo, por conducto de su asesor jurídico especializado en atención a migrantes, en esta ciudad, reclamaron los siguientes actos: “...la privación de mi libertad o detención dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, **por más de 36 horas**...”, así como “...toda omisión de emitir en perjuicio de la libertad del quejoso, la correspondiente orden de salida de la estación migratoria, a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de tres días hábiles que se encuentran alojados en ese recinto contados a partir de su presentación, por ser una detención administrativa de conformidad a lo establecido en el artículo 21 cuarto párrafo de la Constitución Federal”; “... la

recibir mi
e la con
artículo 11
ria y asilo
mento de l
emanda,
con su m
o de mar
citó refug
para envi
s y que
do que p
e los van
amparo,
de migran
n, pidiero
la depor
del ataque
debía t
ado de
necesarias
sujeto a
nera se l
el juicio
al estar a

manda, con su m o de mar citó refug para envi os y que do que p e los van amparo, de migran n, pidiero la depor del ataque debía t ado de ecesarias sujeto a nera se l el juicio al estar a

n, pidiero
la depor
del ataque
debía t
ado de
necesarias
sujeto a
nera se l
el juicio
al estar a

11 of 11

[illegible]

a lo an
solicitó, e
libertad
namente
orden
del artícu
alidad de
ó la med
a los c
fundame

caso, de
ley de A
cio y de
vo a la c
nda, sino

VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b.c.b
2022-03-31 13:41:47

conform
ilegal c
or el art
e plano y
inmedia

Es decir, el juez de Distrito debió conceder la suspensión de plano, incluso de oficio, para el efecto de que los peticionarios quedaran en libertad, máxime que, como se precisó en párrafos que anteceden, **gozan de presunción de inocencia** y, por tanto, mientras no esté acreditado que hayan

Lo hasta aquí razonado, converge incluso con el artículo 2º, párrafo tercero, de la Ley de Migración, donde se establece que el hecho de que una persona extranjera se encuentre en territorio nacional de manera irregular (indocumentada), no implica que esté cometiendo un delito, ni que se estén realizando actos contrarios a derecho.

*“**Artículo 2.** La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.*

*Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. **En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.**[...]”.*

Robustece aún más el sentido de esta ejecutoria, lo señalado en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional –el que si bien no es vinculante para los juzgadores, sí constituye una herramienta orientadora

cional ha
rio, el cua
ministrati
encuent
strativo, c
e debida
ue proteg

e present
que pre
no máxim
cuarto, e
e registrá e
entales,
e amparo

a el fenó
en posib
o, en m
disposici
gano de
observa
a salvag

En efecto, entre las personas extranjeras, que por diferentes motivos transitan o residen en el país, aquéllas en condición migratoria irregular enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo, debido a diversos factores, a saber, su situación de marginación, el desconocimiento de la cultura, idioma y leyes nacionales, el miedo de ser descubiertas por las autoridades migratorias, el verse orilladas a huir de sus países de origen porque su vida, integridad, seguridad o libertad corren peligro y las condiciones en las que viajan; circunstancias a las que, en algunos casos, se añaden aspectos como la edad, el género o la identidad étnica.

Sucesos todos que, si bien resultaron positivos, lo cierto es que hasta nuestros días el acceso a la justicia de las personas migrantes y sujetas de protección internacional aún enfrentan barreras y obstáculos de facto, en particular de orden cultural –idioma, religión y el desconocimiento de la legislación mexicana–, así como de índole económico –carencia de recursos para contratar servicios de defensoría o para costear los gastos derivados de un juicio–.

A estas barreras se suman los trámites burocráticos, traducidos en la exigencia de requisitos adicionales; el poco

te para e
notificac
especialm
ción de
el uso y
de ser
ación mi

que las
puedan s
hos hum
inaceptab
les adquir
o está
chos hum
de mane
pensión c

de mayo
mente en
ados an
actos
además r
l acceso
o proces
de derec
en medid
actos qu
ento.

Este escenario proporciona al Poder Judicial de la Federación una oportunidad única para primar las normas –sean de origen nacional o internacional–, que signifiquen una mayor protección a los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como para sentar precedentes que supriman las barreras que actualmente les impiden el acceso efectivo a la justicia.

“[...] La despenalización de la irregularidad en el ingreso migratorio es una decisión legislativa que conlleva un cambio sustancial en su tratamiento. Esta irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. [...]”

Lo anterior constituye una excepción a las disposiciones migratorias del país. Para quienes se ubican en este supuesto, la

La privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger. El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes ha recomendado abolir progresivamente la detención de personas migrantes y sujetas de protección internacional por razones administrativas. Sin embargo, hasta en tanto este objetivo se logre, la detención administrativa sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley.

En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Sería un contrasentido que la despenalización fuera sustituida por una intervención judicial que tuviera resultados más lesivos para la libertad de esta población, o bien, que colocara a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en condiciones de mayor vulnerabilidad en la defensa de sus derechos frente a cualquier persona procesada en un juicio penal.

La privación de la libertad no debe tener una finalidad punitiva. Por ello, debe realizarse únicamente cuando fuere necesaria, en apego al principio de proporcionalidad y de persecución de un fin legítimo e idóneo, así como asegurar que sea realizada durante el menor tiempo posible.

i) ser admisibles bajo el ámbito constitucional;

iii) ser proporcionales, esto es, que la persecución de un objetivo constitucional no se haga a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

¹⁶ Tesis: 1a./J. 2/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Décima Época, febrero de 2012, Tomo 1, p. 533. Registro IUS: 160267.

$$[\dots]$$
$$[\dots]$$

La suspensión también puede solicitarse para el acto consistente en la privación ilegal de la libertad de personas migrantes y sujetas de protección internacional en estaciones migratorias. Al ser ésta una detención hecha por autoridades administrativas, el otorgamiento de la suspensión debe darse para efectos de que la persona quede en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento correspondientes.¹⁸

¹⁸ Artículo 163 de la Ley de Amparo.

VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b.c.b
2022-03-31 13:41:47

el Máximo
ertad, au
e regula

onalidad
e estar

Asia con
autoridad

¹⁹ Tesis: I.1o.P.99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Novena Época, julio de 2008, p. 1745. Registro IUS: 169268.

*“**Artículo 162.** Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. ...”*

Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad”.

De igual manera, cuando la detención no tenga relación con la comisión de un delito y sea efectuada por autoridades administrativas distintas del ministerio público, el efecto de la medida cautelar también será dejar en libertad al quejoso.

Por tanto, en el caso, la suspensión de plano de los actos reclamados: privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, detención y efectos de la inconstitucionalidad atribuida al artículo 111 de la Ley de Migración, se decreta para el

***** y de su menor hijo de iniciales
*****, a fin de que sean puestos en libertad de forma inmediata, en virtud de que ya pasaron más de treinta y seis horas sin que se haya emitido el acuerdo de presentación, a que se refieren los artículos 68 y 100 de la Ley Migratoria, en tanto no existe constancia de ello y, sin perjuicio de que la autoridad administrativa pueda iniciar el procedimiento correspondiente. En la inteligencia que deberá verificarse el estado de salud en que se encuentran, derivado de la situación actual que se vive a nivel mundial, por la declaración de pandemia de Covid-19, emitida el once de marzo de dos mil veinte, por la Organización Mundial de la Salud, esto es, que no tengan ese padecimiento.

En la inteligencia de que los quejosos quedan a disposición, en cuanto a su libertad, del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado y a la de las autoridades responsables migratorias únicamente para la prosecución del procedimiento administrativo respectivo.

Lo anterior siempre y cuando se cumplan los lineamientos y medidas de seguridad, mismos que deberá vigilar el Juzgado Segundo de Distrito en Estado y que son los siguientes:

- A.** Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerán los quejosos.
- B.** No podrán ausentarse sin previa autorización del Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad.
- C.** Además, como medida de aseguramiento, en términos el numeral 166 de la Ley de Amparo, se impone a los quejosos como obligación la de comparecer ante las autoridades

La medida cautelar aquí decretada surtirá efectos de inmediato sin requisito de garantía alguna.

Al respecto, resultan ilustrativas las tesis aisladas emitidas por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que este tribunal comparte y cuyos rubros y textos dicen:

“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional.”.²⁰

20 Época: Décima Época. Registro: 2016412. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV. Materia(s): Común, Administrativa. Tesis: I.20o.A.19 A (10a.). Página: 3551.

VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b.c.b
2022-03-31 13:41:47

VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b.c.b
2022-03-31 13:41:47

²¹ Época: Décima Época. Registro: 2016410. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV. Materia(s): Común, Administrativa. Tesis: I.20o.A.20 A (10a.). Página: 3550.

Al caso, es aplicable, por analogía y a contrario, la tesis aislada VI.1o.A.9 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice:

VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b.c.ba
2022-03-31 13:41:47

Por tanto, corresponde a este órgano colegiado subsanar la omisión en que incurrió el juez federal al pronunciarse sobre la suspensión provisional en relación con los referidos actos, en los términos siguientes. ■ ■ ■

Así es, en los incisos e), f) y g) del capítulo de actos reclamados de su escrito inicial de demanda la parte quejosa reclamó:

f).- Se les reclama a las autoridades responsables denominadas como **Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Subdirector de Control y Verificación Migratoria, de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, y Subdirector de la Estación Migratoria en las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí**, la omisión de informar a la Procuraduría de

²² Época: Novena Época; Registro: 186111; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo XVI, agosto de 2002; Materia(s): Común, Administrativa; Tesis: VI.1o.A.9 K; página: 1390.

g).- *Se reclama a la autoridad responsable denominada como **Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Estado de San Luis Potosí**, reclamo la omisión de dictar las medidas de protección a favor del menor de edad, así como de la quejosa cuidando el vínculo familiar, así como determinar un albergue distinto a la estación migratoria para salvaguardar el interés superior del menor de conformidad a lo establecido en los artículo (sic) 10, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 fracción X de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación a los artículo (sic) 4, 22, 37, de la Convención Sobre los Derechos de los Niños.*”

En consecuencia, ante la inexistencia de la figura del reenvío, este tribunal colegiado **reassume jurisdicción** para pronunciarse respecto a los requisitos para decidir sobre la procedencia de la suspensión provisional en relación con los referidos actos.

- a) La existencia del acto reclamado;
- b) Si su naturaleza, permite su paralización;
- c) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo²³; y,

23 **“Artículo 128.-** Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurren los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público...”.

o o se tra
primer r
nado se

dico fede
 de mar
 quejosa
 su mej
 los mer
 iere sol
 icitud de
 efugiados
 s cierto.

estitutorio
ienen un

estudios de
ver sobre
extranjero
n y, para
itud de

**LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN
COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO.**

“Artículo 15. En materia de refugiados, le compete a la Secretaría lo siguiente:

I. Efectuar el reconocimiento de la condición de refugiado a los extranjeros que, encontrándose en territorio nacional, así lo soliciten de conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley. En todos los casos a que se refiere esta fracción la Secretaría recabará previamente la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

II. Promover y coordinar acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de refugiados y solicitantes conforme al artículo 20 de esta Ley;

III. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás autoridades competentes en términos del reglamento, promover soluciones duraderas a la problemática que enfrentan los refugiados, durante su estancia en territorio nacional, de conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley;

IV. Llevar un registro actualizado de los solicitantes y refugiados;

V. Orientar a los solicitantes y refugiados que se encuentren en territorio nacional sobre sus derechos y obligaciones;

VI. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas sobre refugiados;

VII. Establecer y difundir criterios que deban considerarse en la atención a solicitantes y refugiados;

VIII. Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias y entidades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y sus Delegaciones, que participen en la atención a refugiados;

IX. Promover acciones para garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado;

X. Llevar a cabo los procedimientos de cesación, revocación y cancelación de la condición de refugiado;

XI. *Atender a los solicitantes y refugiados con pleno respeto a sus derechos humanos;*

XII. Organizar y participar en actividades de difusión sobre los derechos y las obligaciones de los refugiados;

XIII. Promover la difusión y promoción del derecho internacional de refugiados, y brindar capacitación a los funcionarios migratorios y servidores públicos involucrados en la materia;

XIV. *Dictar las medidas necesarias durante los procedimientos de reconocimiento, cesación, revocación y cancelación de la condición de refugiado, y*

XV. Las demás atribuciones que le confieran el reglamento de esta Ley y demás ordenamientos aplicables.”.

“Artículo 18. El extranjero que solicite ser reconocido como refugiado deberá presentar por escrito su solicitud ante la

En el supuesto previsto en el artículo 13, fracción III, el plazo para presentar la solicitud correrá a partir del día siguiente al que tenga conocimiento de los hechos a los que alude dicha disposición.

En el supuesto de que el extranjero no comprenda el idioma español, se procederá conforme a lo establecido por el último párrafo del artículo 23 de esta Ley.

“Artículo 21. Cuando un extranjero que se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento.

Cualquier autoridad que tenga conocimiento de la pretensión de un extranjero de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, deberá dar aviso por escrito y de manera inmediata a la Secretaría. El incumplimiento de lo anterior será sancionado conforme a las disposiciones aplicables en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Durante el procedimiento el solicitante podrá promover por sí o a través de su representante legal. Si el solicitante se encuentra en alguna estación migratoria, se deberán tomar las medidas para garantizar la comunicación con su representante legal o, en su caso, con la persona de su confianza de conformidad con las disposiciones aplicables. En todo momento las entrevistas se deberán desahogar de manera personal con el solicitante, pudiendo estar acompañado por su representante legal.”.

“Artículo 24. La Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.

El plazo para emitir la resolución podrá ampliarse hasta por un período igual a juicio de la Secretaría, sólo en los siguientes casos:

II. La falta de traductor o especialistas que faciliten la comunicación con el solicitante;

IV. La petición del extranjero para aportar elementos que sustenten su solicitud, o

V. Cualquier otra circunstancia derivada del caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite a la Secretaría el adecuado desarrollo del procedimiento.”.

“Artículo 25. La resolución deberá ser notificada por escrito al solicitante. La Secretaría al momento de realizar las notificaciones procurará que el solicitante comprenda el sentido de la resolución.

En los casos de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría expedirá el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país en los términos de las disposiciones aplicables. Si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá interponer recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, de conformidad con lo establecido en el reglamento; de igual forma el extranjero podrá interponer los medios de defensa que estime pertinentes, de conformidad con las disposiciones aplicables.”.

REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA.

*“**Artículo 3.** La aplicación de la Ley y del presente Reglamento corresponde a la Secretaría por conducto de la Subsecretaría, de la Coordinación y del Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias. Sin perjuicio de lo anterior, las atribuciones encomendadas a la Coordinación podrán ser ejercidas directamente por la Subsecretaría...”*

En ningún caso la Coordinación podrá otorgar protección complementaria sin haber determinado previamente la procedencia o no del reconocimiento de la condición de refugiado.”.

I. Proporcionar a los extranjeros información sobre el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado y sobre el procedimiento correspondiente;

III. Resolver sobre el reconocimiento de la condición de refugiado de los extranjeros que, encontrándose en territorio nacional, así lo soliciten;

IV. Emitir las constancias de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a que se refiere el artículo 22 de la Ley;

V. Determinar el otorgamiento de protección complementaria a los extranjeros que se encuentren en los supuestos establecidos en la Ley;

VI. Promover acciones para garantizar el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado;

VII. Resolver sobre los procedimientos de cesación, revocación y cancelación de la condición de refugiado;

VIII. Dictar las medidas necesarias durante los procedimientos de reconocimiento, cesación, revocación y cancelación de la condición de refugiado;

IX. Retirar la protección complementaria, en los supuestos que establece el artículo 32 de la Ley;

X. Llevar un registro actualizado de los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y extranjeros a los que se les otorgue protección complementaria;

XII. Realizar las acciones necesarias para la detección de necesidades de atención a solicitantes, refugiados y extranjeros que reciban protección complementaria;

XIV. Orientar a los refugiados y extranjeros a los que se les otorgue protección complementaria que se encuentren en territorio nacional, sobre sus derechos y obligaciones;

XV. *Proporcionar, cuando sea procedente, asistencia institucional a solicitantes, refugiados y extranjeros que reciban protección complementaria;*

XVI. Registrar y recibir los avisos de cambio de residencia y de salida al país de origen de los refugiados o extranjeros que reciban protección complementaria;

XVII. Emitir un dictamen que determine si los extranjeros reconocidos como refugiados en un tercer país, gozaban o no de protección;

XVIII. Emitir la opinión que el Instituto solicite respecto de la aplicación del artículo 52 de la Ley;

XIX. Resolver los recursos de revisión interpuestos en contra de las resoluciones que se emitan de conformidad con lo dispuesto en la Ley;

XX. Emitir la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto de las solicitudes de extradición relativas a solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados o extranjeros que hayan recibido protección complementaria, para analizar si éstas son acordes o no con el principio de no devolución, y en su caso, proponer las acciones que fuesen procedentes para cumplir con dicho principio, en los términos del artículo 53 de la Ley;

XXI. Emitir dictamen sobre la procedencia de la reunificación familiar en los términos del artículo 58 de la Ley;

XXII. *Organizar y participar en actividades de difusión sobre los derechos y las obligaciones de los solicitantes, refugiados y extranjeros que hayan recibido protección complementaria;*

XXIII. *Propiciar la integración de los refugiados y extranjeros a los que se les otorgue protección complementaria, mediante la coordinación de acciones con las instancias competentes;*

XXIV. Suscribir convenios e implementar mecanismos de cooperación y concertación con organismos nacionales e internacionales y sociedad civil organizada, que participen en la atención a refugiados y extranjeros a los que se les otorgue protección complementaria;

XXV. Coadyuvar con las dependencias y entidades competentes, así como con la Procuraduría General de la República, en la capacitación de los servidores públicos vinculados con la aplicación de la Ley y del presente Reglamento;

XXVII. Las demás atribuciones que le confieran la Ley, este Reglamento y demás ordenamientos aplicables.”.

Además, de acuerdo con lo dispuesto en el diverso numeral 20 de la Ley de Migración, al Instituto Nacional de Migración corresponde, entre otras atribuciones, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros, como se desprende de la siguiente transcripción:

...

...

VII. *Presentar en las estaciones migratorias o en los consulados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten de acuerdo a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento los derechos humanos:... ”.*

“Artículo 16. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Detectar a los extranjeros que, derivado de las manifestaciones vertidas ante la autoridad migratoria o bien por su

II. Coadyuvar con la Coordinación en la recepción de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, remitiéndolas a la Coordinación en un término de 72 horas, contadas a partir de dicha recepción;

IV. Coadyuvar con la Coordinación en la atención a los solicitantes que se encuentren en una estación migratoria durante el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado;

VI. *Coadyuvar con la Coordinación a fin de que ésta realice la notificación de las resoluciones sobre el reconocimiento de la condición de refugiado o el otorgamiento de protección complementaria;*

VIII. Coadyuvar con la Coordinación a fin de que ésta realice la notificación de las resoluciones que se emitan respecto a los recursos de revisión interpuestos;

X. Resolver, con base en el dictamen que emita la Coordinación, la situación migratoria de los extranjeros reconocidos como refugiados en un tercer país que se internen al territorio nacional en contravención a las disposiciones de ingreso;

XI. Autorizar la internación a territorio nacional de los extranjeros respecto de los cuales la Coordinación haya determinado la procedencia de su reunificación familiar;

XII. Expedir el documento migratorio que acredite a los refugiados la residencia permanente en los Estados Unidos Mexicanos;

XIII. Expedir el documento migratorio que acredite a los extranjeros que reciban protección complementaria la residencia permanente en los Estados Unidos Mexicanos;

XIV. Expedir a los refugiados reconocidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, el documento migratorio que acredite la residencia permanente en los Estados Unidos Mexicanos;

XV. *Capacitar a sus servidores públicos sobre los derechos y obligaciones de los solicitantes, refugiados y extranjeros que reciban protección complementaria, en materia migratoria;*

XVII. Las demás atribuciones que le confieran la Ley, este Reglamento y demás ordenamientos aplicables.”.

“Artículo 17. Las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado serán presentadas de acuerdo a las siguientes disposiciones:

II. La solicitud se podrá presentar en cualquier idioma o lengua;

IV. La Coordinación informará por escrito al Instituto, dentro de las 72 horas siguientes, sobre la presentación de la solicitud.

Para efectos de la fracción I, en coadyuvancia, el Instituto podrá recibir las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, las cuales deberán ser remitidas a la Coordinación dentro de las 72 horas siguientes a su recepción.”.

*“**Artículo 18.** Conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley, cualquier autoridad que tenga conocimiento de la pretensión de un extranjero de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, deberá notificarlo por escrito a la Coordinación en un término no mayor a 72 horas, a efecto de que ésta tome las medidas necesarias para iniciar el procedimiento correspondiente.”.*

*“**Artículo 19.** Para efectos del cumplimiento del artículo 18 de la Ley, la Coordinación de manera excepcional dará trámite a las solicitudes presentadas fuera del plazo previsto, cuando el extranjero acredite que por causas ajenas a su voluntad no le fue materialmente posible presentarla oportunamente.”.*

“Artículo 22. Una vez presentada la solicitud, el solicitante no podrá ser devuelto a su país de origen. La Coordinación, sin perjuicio del derecho a la no devolución de los solicitantes, en cada caso solicitará por escrito al Instituto, que se abstenga de tomar medidas para devolver al solicitante a su país de origen, así como no

“Artículo 38. A efecto de cumplir con lo previsto en el artículo 22 de la Ley, la Coordinación deberá emitir una constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado que haya sido admitida, la cual será entregada directamente por la Coordinación o bien, a través del Instituto al solicitante y a los familiares que lo acompañan.

“Artículo 45. *La Coordinación deberá resolver cada solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, dentro del plazo de 45 días hábiles contados a partir de que hubiese sido admitida.*

En caso que la resolución establezca que no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, deberá informársele sobre su derecho a presentar el recurso de revisión previsto por la Ley, así como los requisitos y plazos para ello.

De lo anterior, se advierte que contra los efectos y las consecuencias del acto reclamado a las autoridades responsables migratorias consistente en la negativa de recibir su solicitud de inicio de procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiados, sí procede la suspensión provisional, ya que, se insiste, ésta puede tener efectos restitutorios.

En otro aspecto, este tribunal considera que, en el caso, sí se reúnen los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber:

- El primer requisito está satisfecho, toda vez que los quejosos solicitaron expresamente la suspensión de los actos reclamados en su demanda de amparo.

Por tanto, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, al no existir reenvío y, al reunirse los requisitos del artículo 128 de dicho ordenamiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 138, fracción I, de la propia ley, se **concede la suspensión provisional, para el efecto de que, por una parte, las autoridades migratorias responsables, en ejercicio de sus facultades y en coadyuvancia con la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, reciban y remitan a ésta la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada que los quejosos afirman realizaron y, por otra parte, para que la autoridad administrativa en materia de refugiados dé trámite a dicha solicitud.**

de los
de Repu
do de Sa
oria, de
Migració
Estació
nstituto I
consisten
ñas, Niño
situación
dictar las
e se resu

co, com
por esa
que, incl
erechos
s migrar
identificad

de niños
los, la si
e merece
ante, sin

estación

Apoya el aserto anterior, la tesis aislada 2a. CXLI/2016, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 38, enero de 2017, tomo I, décima época, página 792, que establece:

VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b.c.b
2022-03-31 13:41:47

A la par de lo anterior, el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la

“Derechos para hacer efectivo el acceso a la justicia”

1. Derecho a la información, asistencia legal, defensa pública y derecho a un o una intérprete o traductora

2. *Derecho a la asistencia consular*

Asimismo, en la OC16/99, la Corte IDH resolvió que el derecho a comunicarse con el representante consular contribuye a mejorar considerablemente las posibilidades de defensa y a que los actos procesales realizados se apeguen a la ley y respeto a la dignidad de las personas.

Ahora bien, el derecho a la asistencia consular encuentra una excepción importante en el caso de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado y refugiadas: al tener temor de una persecución en el que su vida, libertad, seguridad o integridad corren peligro, es entendible que no quieran involucrar a su Estado cuando éste es el agente persecutor, o bien cuando no pudo o no quiso otorgarle a la persona la protección nacional que requería.

3. Sistemas adecuados de identificación de personas en situación de vulnerabilidad

Reglas específicas de actuación

D) Reglas de actuación para casos que involucren a niños, niñas y adolescentes migrantes

Los niños, niñas y adolescentes pueden tener problemas para expresar sus relatos de la misma manera que lo haría una persona adulta por diversos motivos, entre los que se encuentran: los traumas, el miedo a ser coaccionado, la desconfianza ante la persona que lo interroga, el desconocimiento de las consecuencias de lo que le pudo haber pasado, el que les hayan hecho memorizar un testimonio.

Por ello, resulta fundamental lograr un ambiente de confianza y contar con personal capacitado. Estas dificultades se incrementan con la migración, y pueden hacer que los niños, niñas y adolescentes **sean aún más vulnerables**, particularmente si se trata de personas sujetas de protección internacional.

Es muy importante que los niños, niñas y adolescentes cuenten con toda la información de manera sencilla, de forma que entiendan todas sus opciones legales y las consecuencias de cada una de ellas, así como el sentido de su resolución y los pasos que se tendrán que seguir posteriormente. En este sentido, y para garantizar que el o la menor de edad tiene acceso a toda la información disponible y la

2. Prioridad, no privación de la libertad y asistencia

La Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece el derecho de prioridad en su artículo 14. Al respecto, el Pleno de la SCJN se ha pronunciado en el siguiente sentido: “el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores”.

$$(\dots)$$

*En los casos en que, por una circunstancia excepcional, sean detenidos en una estación migratoria se debe cuidar que las condiciones sean adecuadas; los niños, niñas y adolescentes deben permanecer en un área especial dentro de la estación migratoria separada de la que corresponde a las personas adultas, a menos que, haciendo una revisión del interés superior del niño, se decida que es preferible privilegiar el derecho a la unidad familiar y que permanezcan con su madre o padre en algún otro espacio. Los niños, niñas y adolescentes podrán establecer contactos periódicos con amistades y parientes, con su tutor o tutora; **tener acceso a productos de primera necesidad, asistencia** espiritual, religiosa, social y **jurídica**, y podrán recibir **tratamiento médico** y ayuda psicológica.*

Finalmente, “los niños, niñas y adolescentes que sean solicitantes de asilo tienen derecho a recibir la protección y asistencia humanitaria adecuadas y a reunirse con sus familiares”.

De acuerdo con la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el objetivo de su protección es

Por tanto, existe una obligación para quienes juzgan **de suplir la deficiencia de la queja** cuando ésta se formule a favor de los intereses de los niños, niñas y adolescentes, máxime cuando se trate del derecho a la satisfacción de sus necesidades para su desarrollo integral: **alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.**

$$(\dots)$$

En casos de familias de personas migrantes y sujetas de protección internacional que vengan con niños, niñas y adolescentes, es importante que se aplique el principio de unidad familiar fuera de la estación migratoria; esto es, que las familias puedan llevar sus procedimientos en libertad mediante alternativas a la detención, respetando, de esta manera, tanto el principio del interés superior del niño como el principio de unidad familiar. Cuando las personas migrantes sujetas de protección internacional viajan sin sus familias, enfrentan significativas dificultades para la reunificación o internación familiar. En apego al principio de unidad familiar, deben ponerse en práctica acciones específicas para estas personas dependiendo de su situación y sus necesidades.

(...)

1. Excepcionalidad de la detención

$$(\dots)$$
$$(\dots)$$

Por otro lado, las personas detenidas (“alojadas”) en las estaciones migratorias deben ser tratadas con respeto a la dignidad inherente del ser humano. Se debe supervisar que se cumpla con lo previsto en las Normas para el Funcionamiento de Estaciones Migratorias así como con el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. Esto quiere decir que se debe proporcionar condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, asegurar que la población se encuentre dividida en hombres y mujeres, garantizar los derechos a la alimentación y a la salud, y propiciar actividades de recreación.

Las medidas cautelares surgen para evitar que la intervención judicial tenga resultados más lesivos o coloque a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando están privadas de su libertad.

Ahora bien, por la naturaleza de los actos que motivan a las personas migrantes y sujetas de protección internacional a acudir a tribunales, la medida jurídica más utilizada es la suspensión del acto con el amparo.

$$(\dots)$$

En este sentido se han pronunciado Tribunales Colegiados de Circuito, que reconocen que las personas detenidas por orden de la

Por otro lado, quienes juzgan pueden también adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos y con apego a la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones de derechos humanos.

D) Reglas de actuación para casos que involucren a niños, niñas y adolescentes migrantes

Otro aspecto fundamental en la evaluación del interés superior del niño es evitar la privación de la libertad; esto es, no puede justificarse la detención únicamente por su condición de persona inmigrante, debe utilizarse como último recurso y durante el período más breve posible.

Aun cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en las tesis aisladas 1a. XIV/2014 y 1a. CCLXIII/2014, que el *protocolo de actuación* mencionado, si bien, sólo es una guía, por lo que no es vinculante, al no tener valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, lo cierto es que sí constituye una herramienta para los juzgadores, a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a niñas, niños y adolescentes, pues establece prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable, lo que es trascendente; de ahí que sea viable su observancia para orientar esta resolución.

Las reglas del Protocolo reproducidas con antelación revela que, como parte de la actuación para quienes imparten justicia, en que se encuentren involucrados los derechos de niños, niñas o adolescentes migrantes en detención, se debe priorizar el respeto al principio del interés superior del menor, así como al de unidad familiar *–para quienes se encuentren acompañados por familiares–* y el de separación *–para quienes no se encuentren acompañados por familiares–*, mediante la adopción de los

e la libertad
 ción de m
 ntación, s
 mos que
 artidor de
 o la ópti
 alternati
 ón migr
 medida c
 al, cualqu
 o alojam
 tanto s
 r posible
 aminar
 enores, q
 su esta

e la libertad
 ción de m
 ntación, s
 mos que
 artidor de
 o la ópti
 alternati
 ón migr
 medida c
 al, cualqu
 o alojam
 tanto s
 r posible
 aminar
 enores, q
 su esta

e la libertad
 ción de m
 ntación, s
 mos que
 artidor de
 o la ópti
 alternati
 ón migr
 medida c
 al, cualqu
 o alojam
 tanto s
 r posible
 aminar
 enores, q
 su esta

Por otra parte, los artículos 66, 107, 109 y 112 de la Ley Migratoria establecen lo siguiente:

El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con independencia de su situación migratoria.”

I. Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica;

Asimismo, cuando así lo requiera el tratamiento médico que se haya; prescrito al alojado, se autorizarán dietas especiales de alimentación. De igual manera se procederá con las personas que por cuestiones religiosas así lo soliciten;

IV. Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar;

VI. Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento;

VIII. Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular;

X. Las demás que establezca el Reglamento.

“Artículo 109. *Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria:*

II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; (...)

III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. (...)

IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas;

V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio;

VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español;

VII. Acceder a comunicación telefónica;

VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario;

IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal;

X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones;

XI. *No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;*

XIII. *Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente;*

XV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría.”

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables (sic), dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. *Se le informará a la niña, niño y adolescente del motivo de su presentación, de sus derechos dentro del procedimiento migratorio, de los servicios a que tiene acceso y se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;*

III. *Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, la ubicación de las instalaciones del Sistema Nacional o Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de*

IV. Personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, entrevistará al niño, niña o adolescente con el objeto de conocer su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica.

V. En coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente o de la institución de asistencia del niño, niña o adolescente del país de que se trate se procederá a la búsqueda de sus familiares adultos, salvo a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular.

VI. Una vez resuelta la situación migratoria del niño, niña o adolescente y en caso de resolverse la conveniencia de su retorno asistido se notificará de esta situación al consulado correspondiente, con tiempo suficiente para la recepción del niño, niña o adolescente en su país de nacionalidad o residencia.

El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país de nacionalidad o residencia se realizará atendiendo al interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la autoridad competente del país de nacionalidad o residencia.

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.

VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b.c.b
2022-03-31 13:41:47

Contempla, que se deben tomar las medidas que aseguren su integridad física, que se mantenga a los niños preferentemente junto con su madre, padre o acompañante, excepto en los casos que así convenga, atento al interés superior del menor.

Aunado a ello, prevén el procedimiento en la atención de personas en situación de vulnerabilidad, como son los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, en que se destaca la obligación del Instituto Nacional de Migración **de canalizarlos de manera inmediata al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, a fin de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria, dando aviso al consulado de su país.**

En caso de que los menores no puedan ser canalizados, en los términos apuntados, deberán permanecer en la estación de migración, en donde se les deberá asignar un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos, aunado a que dichas estaciones deben contar con áreas separadas para niñas, niños y adolescentes migrantes, en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada.

De lo anterior, se dará aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los

Finalmente, se debe informar a la niña, niño y adolescente del motivo de su presentación, de sus derechos dentro del procedimiento migratorio, de los servicios a que tienen acceso y se le pondrá en contacto con el consulado de su país.

Sin embargo, el juez de Distrito perdió de vista que la parte recurrente también reclamó la omisión de las autoridades responsables de informar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Estado de San Luis Potosí, la situación del menor de edad quejoso, así como la omisión de dictar las medidas de protección especiales en su favor, en lo que se resuelve su situación migratoria.

Por tanto, si de la intección armonizada de los artículo 164 de la Ley de Amparo, 66, 107, 109 y 112 de la Ley Migratoria, el Protocolo que guía la actuación de los juzgadores, en los casos en que se encuentren involucrados los derechos de menores migrantes y la Opinión Consultiva OC-21/14 de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, se desprende una serie de medidas que coadyuvan a priorizar el respeto de los derechos de los menores, acompañados o no por familiares, detenidos en las

superior
for soslay

debe
al decre
ables, e
en las me
como par
Niños y
onsable)
que adop
que se
apoyo,

apoyo,

**NIÑOS
SUSPENSI
TRA SU
ENIDOS**
la Ley de
mo del P
asos que A
cional, se
el respeto
, acompañ
orias, que
in y unida
menor de

autoridad n...
es; 2. Esp...
hecho a as...
ore el est...
o de que s...
algún tutor...
tar la com...
ara el De...
y de la C...
o de su p...
onocimien...
Federal...
de su c...
y vigilar...
espacio...
y que cu...
lescentes,
as en libe...
ojamiento...
estuardo, es...
a.)²⁵ apro...
sticia de...
s mil diec...
en su...
inclusi...
órgano...
d al caso...
zonamien...
el caso,
es de la...
en ésta.

estudado, es
a.)²⁵ apro
sticia de
s mil diec
en su
inclusi
órgano
d al caso
zonamier
el caso,
es de la
en ésta.

²⁵ “Publicada el viernes seis de abril de dos mil dieciocho a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación, obligatoria a partir del lunes nueve siguiente, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013”.

Por lo expuesto, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 97, fracción I, inciso b) 98 y 99 de la Ley de Amparo en vigor y 35, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se

ÚNICO. Es **fundado** el recurso de queja **100/2020**.

interpuesto por ***** y su menor hijo de identidad protegida, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ***** , en contra del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto *****; en consecuencia, se **modifica** el acuerdo recurrido **y**, **por una parte, en reasumida jurisdicción, se regulariza el procedimiento, a fin de conceder la suspensión de oficio y de plano** respecto de los actos reclamados, consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, la detención e inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley Migratoria, para los efectos señalados en esta ejecutoria, la cual regirá en el cuaderno principal del juicio de derechos

²⁶ “**Artículo 217.** La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales...”

“SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.”.

diversos
le inicio
refugiado
duría de
estado de
entidad p
especiales

estimonio
edencia; a
ente y en
su oportu

de votos
vil y Adm
rados, Ec
Dalila Q
firman
anterior,
o.- Magi
grajales.-
Garzón
Alajeró

de donde
ciudad de

Conste.-

Verónica Arredondo Ramírez.

Pamq.

Archivo firmado por: VERÓNICA ARREDONDO RAMÍREZ
Serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bc.bc
Fecha de firma: 02/04/2020T22:51:30Z / 02/04/2020T16:51:30-06:00
Certificado vigente de: 2019-04-01 13:41:47 a: 2022-03-31 13:41:47

El dos de abril de dos mil veinte, la licenciada Verónica Arredondo Ramírez, Secretario de Tribunal, con adscripción en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito , hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.